

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA c/ LUQUE, JUAN ANDRES -APREMIOS- s/ QUEJA
POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Cita: 383/25

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa:

Nº de tomo: 2025

Pág. de inicio: 0

Pág. de fin: 0

Fecha del fallo: 24/06/2025

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Jorge Camilo BACLINI

Daniel Aníbal ERBETTA

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Margarita Elsa ZABALZA

Texto del fallo

T. 2025, SENTENCIA NRO. 383

Provincia de Santa Fe, 24 de junio del año 2025.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia 1350, de fecha 17 de mayo de 2024, dictada por el Juez de Primera Instancia de Circuito Número 5 de la ciudad de Rafaela, en autos "MUNICIPALIDAD DE RAFAELA contra LUQUE, JUAN ANDRES -APREMIOS- (CUIJ 21-16520938-6)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00516311-8); y,

CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que el Juez de Primera Instancia de Circuito Número 5 de la ciudad de Rafaela, por sentencia 1350, dictada en fecha 17.5.2024, rechazó la excepción de inhabilidad de título y -parcialmente- la de prescripción (cuotas 12 y 13 del convenio de pago por derechos impagos, correspondientes a los períodos 2016/08 y 2016/09), mandando llevar adelante la ejecución por el resto (cuotas 15, 16 y 17, por \$1.039,50), con más los intereses establecidos en legal forma y costas (90% a cargo de la demandada y 10% a cargo de la actora).

2. Contra esa resolución la Municipalidad de Rafaela interpuso recurso de inconstitucionalidad de la ley 7055 por considerarla violatoria de los derechos y garantías de raigambre constitucional que invoca.

En tren de fundar la admisibilidad de la vía extraordinaria y en lo que respecta a la definitividad del pronunciamiento atacado, afirmó que en el caso se perfeccionaban las situaciones excepcionales que habilitaban esta instancia de revisión excepcional.

Argumentó sobre la procedencia de la impugnación sosteniendo que, al acoger parcialmente la excepción de prescripción, el Magistrado arremetió contra la Constitución de la Provincia de Santa Fe y contra la nacional (especialmente arts. 5, 121 y 123), desconociendo a su vez toda la normativa pública provincial vigente, la autonomía tributaria provincial (y municipal) reconocida constitucionalmente y las facultades no delegadas a la Nación expresamente previstas por los artículos 55 -incisos 19 y 27- y 107 de la Constitución de Santa Fe y los artículos 75 -inciso 12- y 121 de la nacional.

Reprochó al A quo haber resuelto la cuestión desde la normativa civil pretérita basándose en un criterio jurisprudencial ya falto de vigencia producto de la nueva normativa aplicable soslayando y descalificando expresas disposiciones constitucionales y legales derivadas como el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Señaló que, en vez de declarar inconstitucionales los artículos 2532 y 2560 de dicho cuerpo normativo interpretando que la doctrina de la Corte nacional delineada a partir del caso "Filcrosa" así lo exigía, debió considerar tales disposiciones nuevas en armonía con las previsiones constitucionales (tanto de la Carta Magna nacional como provincial).

Interpretó que, al razonar como lo hizo, el Juez convirtió en ley suprema una interpretación sólo posible y no pacífica de un artículo del Código Civil para menoscabar la autonomía de los Estados locales con lesión palmaria al federalismo, trayendo en apoyo de tales críticas jurisprudencia y doctrina respecto del reconocimiento del ejercicio de las potestades tributarias autónomas desde el nacimiento de la obligación fiscal hasta su extinción, pasando por el régimen, cumplimiento y exigibilidad, entre otros aspectos de la relación que no es de derecho común sino de derecho público.

En sustento de su impugnación, añadió que el nuevo Código Civil y Comercial no formaliza un reenvío a las legislaciones locales, ni una delegación prohibida, ni distribuye competencias constitucionales, sino que reconoce que esta materia es parte de las facultades no delegadas a la Nación concluyendo con los diferendos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales previos a su entrada en vigencia.

Por otra parte citó jurisprudencia de esta Corte para sostener sus reproches en punto a la lógica constitucional de la normativa local en juego relativa al cómputo de la prescripción, frente a la inconstitucionalidad del artículo 35 de la ley 8173 declarada por el Juez (por contradecir los artículos 2554, C.C.C. Y 3956, C.C. -ley 340-).

También se agravó de que, al fallar como lo hizo, el Sentenciante se apartó inadmisiblemente de normativa aplicable, refiriendo al propio convenio 147076 suscripto por las partes y la ordenanza tributaria 4780/2016. Se quejó de que considerara cada una de las cuotas comprendidas en el plan de pago formalizado a través de dicho convenio, como obligaciones autónomas entre sí, computando la prescripción desde que cada una de ellas fue debida (y no desde la caducidad del convenio que se producía ante la falta de pago en tiempo y forma de tres cuotas alternadas o consecutivas).

Sostuvo que la propia normativa impide al fisco reclamar judicialmente la deuda antes del vencimiento de la tercera cuota, por lo que la deuda no es exigible hasta que opere el vencimiento del último período de gracia estipulado. De ello se sigue, afirmó, que recién ante la falta de pago de la cuota 10/2016 la deuda resultó exigible, por lo que la declaración de prescripción de las cuotas 8/2016 y 9/2016 dispuesta por el Juez debe ser revocada.

Finalmente, considerando demostrada la lesión de expresas disposiciones constitucionales al declarar la inconstitucionalidad de las normas referidas y el daño que produjo a los derechos invocados, solicitó se revoque el fallo impugnado, haciendo reserva federal del caso.

3. Por pronunciamiento de fecha 19.11.2024 el Magistrado actuante denegó la concesión del recurso extraordinario, por considerar que la cuestión constitucional no había sido planteada oportunamente pero, a más de ello, la crítica no es más que la mera expresión de su disconformidad con lo resuelto. Ante tal denegación, la Municipalidad comparece de manera directa ante esta Corte.

4. De acuerdo al inveterado criterio de esta Corte, las sentencias dictadas en los juicios de apremio, como regla general, carecen del carácter definitivo exigido en el artículo 1 de la ley 7055, por cuanto, al no presentar autoridad de cosa juzgada sustancial, lo allí decidido puede ser objeto de revisión en un juicio ordinario posterior, conforme lo prevé expresamente el artículo 26 de la ley 5066 ("Municipalidad de Rosario c. Stranieri", A. y S. T. 34, pág. 284; "Municipalidad de Villa Constitución c. Cardinalli", A. y S. T. 96, pág. 108; "Municipalidad de Santa Fe c. Savio", A. y S. T. 113, págs. 275 y 279; "Municipalidad de Rosario c. Frigorífico La Tropa", A. y S. T. 134, pág. 53; "Comuna de Pueblo Muñoz c. Ferro Expreso Pampeano", A. y S. T. 153, pág. 160; "Comuna de Sa Pereira c. César", A. y S. T. 188, pág.

457; "Municipalidad de la ciudad de Coronda c. Coronda TV Color", A. y S. T. 196, pág. 97; "Municipalidad de Santa Fe c. Iconicoff", A. y S. T. 208, pág. 386; "Municipalidad de Rosario c. Guardería Náutica", A. y S. T. 211, pág. 341; "Municipalidad de Villa Constitución c. Beltramini", A. y S. T. 223, pág. 85; "Municipalidad de Santa Fe c. Construcciones Santa Fe", A. y S. T. 227, pág. 435; "Comuna de Amenábar c. Hijos de Daniel E. Young", A. y S. T. 242, pág. 355; "Municipalidad de Rosario c. Agrano", A. y S. T. 246, pág. 488; y "Municipalidad de Rosario c. Nestlé", A. y S. T. 259, pág. 276; entre muchos otros).

No obstante, habrá de otorgárseles tal efecto cuando hayan sido dictadas en procesos en los que se hubieran ventilado excepciones procesales relativas al juicio ejecutivo o cualquier otra excepción o defensa que se hubiera deducido, sustanciado y decidido sin limitación de prueba, pues aquella revisión ulterior ya no resulta viable (A. y S., T. 95, pág. 132; T. 114, pág. 23; T. 212, pág. 125; entre otros).

Dándose precisamente esta situación en la especie, corresponde tener por superado el recaudo formal aludido e ingresar al análisis constitucional de la sentencia atacada por cuanto las postulaciones de la recurrente guardan suficiente conexión con los antecedentes de la causa, e importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta por la demandada y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

FDO. DIGITALMENTE: SPULER - BACLINI - ERBETTA - GUTIÉRREZ - ZABALZA - PORTILLA (SECRETARIA)

Tribunal de origen: Juez de Primera Instancia de Circuito Número 5 de la ciudad de Rafaela.